

Seumas Milne

EL ENEMIGO INTERIOR
LA GUERRA SECRETA CONTRA LOS MINEROS

Traducción de Manuel Valle Morán

Alianza Editorial

Título original: *The Enemy Within*

Esta obra ha sido publicada por primera vez en inglés en 1994 por Verso. Esta cuarta edición de la obra ha sido publicada por Verso en 2014.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaran, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

© Seumas Milne, 1994, 1995, 2004, 2014

© de la traducción: Manuel Valle Morán, 2018

© Alianza Editorial, S. A., Madrid, 2018

Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 15; 28027 Madrid

www.alianzaeditorial.es

ISBN: 978-84-9104-830-5

Depósito Legal: M. 16.861-2017

Printed in Spain

SI QUIERE RECIBIR INFORMACIÓN PERIÓDICA SOBRE LAS NOVEDADES DE ALIANZA EDITORIAL, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:

alianzaeditorial@anaya.es

ÍNDICE

ABREVIATURAS	11
PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN	15
INTRODUCCIÓN. LA GUERRA SECRETA CONTRA LOS MI- NEROS	34
Una venganza de veinte años	39
El factor Scargill	47
Una amenaza a la libertad	54
La bestia no ha muerto	59
Alianza impía	64
Conspiraciones y embrollos	67
1. LA OPERACIÓN CÍCLOPE	71
«Los hechos»	74
La cuenta atrás	82
Grietas en el edificio	95
2. UNA MANO OCULTA	107
La vorágine de julio	112
Agentes soviéticos	123

Periodismo del tipo más rastroso	132
La bestia responde	145
Un error de juicio	147
3. AMISTADES PELIGROSAS	158
Un terrorista de la tienda de la esquina	160
El beso de Judas	165
El correo fantasma	172
Los papeles de Trípoli	180
Recapitulación	188
La historia del hombre del maletín	194
La impostura	198
4. EL EXTRAÑO MUNDO DE ROGER WINDSOR	203
Un extraño	204
Operación Forops	213
Una comedia de errores	218
La Resolución 13	224
El desenlace	230
Las filtraciones de Dalzell	240
5. TODOS LOS HOMBRES DE MAXWELL	249
El amigo de los espías	251
El <i>Mirror</i> y los mineros	258
La primicia de la década	265
El vínculo con el laborismo	272
6. EN BUSCA DEL ORO DE MOSCÚ	290
Los rusos y la huelga general	291
La nueva Internacional	294
Una huelga sin fronteras	297
La fiebre del oro de Moscú	300
El factor Gorbachov	307
Los documentos de Moscú	317
En busca de cobijo	330
7. LAS GUERRAS DE STELLA	340
Las filtraciones Cleave	342
Stella Rimington y los mineros	352

El corazón de las tinieblas	360
Pánico de clase	370
El soplo de Brixton	379
CONCLUSIÓN. ¿QUIÉN TENDIÓ LA TRAMPA A SCARGILL?	390
El ajuste de cuentas	392
Años de corrupción	397
El perro guardián como perro faldero	402
El legado	411
EPÍLOGO A LA CUARTA EDICIÓN	419
NOTAS	441

ABREVIATURAS

AEU	Amalgamated Engineering Union (Sindicato de Ingenieros Unidos).
BC	British Coal (antes NCB).
CEGB	Central Electricity Generating Board (Junta Central de Productores de Electricidad).
CEU	Coal Employees' Union (Sindicato de Empleados del Carbón. URSS).
CGT	Confédération Générale du Travail (Confederación General del Trabajo. Francia).
CIA	Central Intelligence Agency (Agencia Central de Inteligencia. EE.UU.).
CLPD	Campaign for Labour Party Democracy (Campaña por la Democracia en el Partido Laborista).
CPBF	Campaign for Press and Broadcasting Freedom (Campaña por la Libertad de la Prensa y la Radiotelevisión).
CPGB	Communist Party of Great Britain (Partido Comunista de Gran Bretaña).
CPSA	Civil and Public Services Association (Asociación de Servicios Civiles y Públicos).
DST	Direction de la Surveillance du Territoire (Dirección de la Vigilancia del Territorio. Servicio de inteligencia francés).
EMA	Engineers' and Managers' Association (Asociación de Ingenieros y Gerentes. Ahora forma parte de Prospect).
FBU	Fire Brigades' Union (Sindicato Británico de Bomberos).
GCHQ	British Government Communications Headquarters (Centro de Comunicaciones del Gobierno Británico).

ICFTU	International Confederation of Free Trade Unions (Confederación Internacional de Sindicatos Libres. Ahora International Trade Union Confederation).
IEMO	International Energy and Miners' Organization (Organización Internacional de la Energía y la Minería. Sucesora de la IMO).
IMO	International Miners' Organization (Organización Internacional de Mineros).
IRIS	Industrial Research and Information Service (Servicio de Investigación e Información Industrial).
JIC	Joint Intelligence Committee (Comité Conjunto de Inteligencia).
KGB	Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (Comité de Seguridad del Estado soviético).
MFGB	Miners' Federation of Great Britain (Federación de Mineros de Gran Bretaña).
MI5	Servicio británico de seguridad.
MI6	Servicio británico de inteligencia exterior.
MIF	Miners' International Federation (Federación Internacional de Mineros).
MSF	Miners' Solidarity Fund (Fondo de Solidaridad de los Mineros).
MTUI	Miners' Trade Union International (Internacional Sindical de Mineros).
NACODS	National Association of Colliery Overseers, Deputies and Shotfirers (Asociación Nacional de Supervisores, Controladores y Dinamiteros de las Minas).
NSA	National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional. EE.UU.).
NCB	National Coal Board (Consejo Nacional del Carbón; pasó a llamarse BC).
NED	National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia. EE.UU.).
NGA	National Graphical Association (Asociación Nacional de Artes Gráficas. Ahora forma parte de Unite).

NSA	National Security Agency (Agencia Nacional de Seguridad. EE.UU.).
NUJ	National Union of Journalists (Sindicato Nacional de Periodistas).
NUM	National Union of Mineworkers (Sindicato Nacional de Mineros).
NUPE	National Union of Public Employees (Sindicato Nacional de Empleados Públicos. Ahora forma parte de Unison).
NUR	National Union of Railwaymen (Sindicato Nacional de Ferroviarios. Ahora forma parte de RMT).
NUS	Sindicato Nacional de Marineros (National Union of Seamen).
PCC	Press Complaints Commission (Comisión de Quejas de la Prensa).
PCUS	Partido Comunista de la Unión Soviética.
PPP	Pakistan People's Party (Partido del Pueblo de Pakistán).
PPP	People's Progressive Party (Partido Progresista del Pueblo. Guyana).
PSI	Public Services International (Internacional de Servicios Públicos).
SIS	Secret Intelligence Service (Servicio Secreto de Inteligencia. Es otro nombre del MI6).
SOE	Special Operations Executive (Dirección de Operaciones Especiales).
TGWU	Transport and General Workers' Union (Sindicato de Trabajadores del Transporte y Afines. Ahora forma parte de Unite).
TUC	Trades Union Congress (Congreso de los Sindicatos).
UDM	Union of Democratic Mineworkers (Unión de Mineros Demócratas).
WFTU	World Federation of Trade Unions (Federación Sindical Mundial).
YCL	Young Communist League (Liga de Juventudes Comunistas).

PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN

Treinta años más tarde, las secuelas de la huelga de los mineros de 1984-1985 todavía se perciben en Gran Bretaña. Sin duda alguna, la huelga significó un hito en la historia del país del período posterior a la guerra. De hecho, no ha existido ningún acontecimiento similar —en tamaño, duración e impacto— en ninguna otra parte del mundo. Fue el enfrentamiento interno decisivo de los años de gobierno de Thatcher: un conflicto que enfrentó al sindicato más poderoso y politizado del país contra una administración gobernada por la derecha más dura y conservadora, empeñada en una venganza de clase y dispuesta a arrasar en ella las zonas industriales y el sector de la energía del país, sin reparar en los costes. Todo ello convulsionó a Gran Bretaña, convirtiendo a las comunidades mineras en territorios ocupados, y se estuvo más cerca de lo que se creyó entonces de vencer el ataque del gobierno de Thatcher a las organizaciones de los trabajadores.

Aquella huelga, que duró un año, fue una batalla defensiva para proteger sus medios de vida y sus comunidades, que los mineros no pudieron evitar. Pero también fue un desafío a la transformación destructiva de la vida económica basada en el beneficio y el mercado, ya entonces en pleno desarrollo. Planteó la alternativa de una Gran Bretaña distinta, basada en la solidaridad y en la acción colectiva, contra el individualismo y la codicia de los años de Thatcher —simbolizados por los fajos de billetes para pagar las horas extras que sus escuadrones antidisturbios agitaban ante los piquetes de mineros.

Una generación más tarde, el fundamentalismo de mercado desatado por Margaret Thatcher a raíz de aquella huelga ha perdido terreno debido a la crisis del capitalismo desregularizado que

ella defendió; y, por supuesto, no sólo en Gran Bretaña. Dos décadas después de que los mineros abandonaran su resistencia abierta a lo que se convirtió en un asalto del Estado sin ningún tipo de trabas, el legado de la terapia de choque del gobierno Thatcher sigue sin tener prácticamente oposición en el país, mientras que el orden neoliberal del que ella fue pionera reina en casi todo el mundo. En Gran Bretaña, la privatización, la City, la desregulación social, la bajada de impuestos a los más ricos y la flexibilidad laboral se convirtieron en el orden del día, tanto con John Major como, con algunos cambios, con Tony Blair. Una vez quedaron los sindicatos de rodillas, los salarios se estancaron y se extendió la inseguridad en el empleo, a medida que los beneficios y las remuneraciones de los consejos de administración se disparaban. A nivel global, el «libre mercado» del Consenso de Washington casi no fue cuestionado durante toda la década de los noventa.

La crisis financiera de 2008 y la extraordinaria crisis económica que ésta desencadenó desacreditaron esta ortodoxia, que ha fracasado del modo más espectacular y destructivo. El modelo de capitalismo que Thatcher había tomado del dictador chileno Pinochet —y que, junto con Ronald Reagan, llegó a simbolizar— sólo pudo librarse de su hundimiento por medio de la mayor intervención del Estado que se haya visto en la historia. Ello no ha impedido que los gobiernos de todo el mundo occidental, incluyendo la coalición liderada por los conservadores de David Cameron en Gran Bretaña, hayan utilizado la crisis para tratar de reconstruirlo y afianzarlo aún más, a través de la austeridad y de privatizaciones todavía de mayor alcance. Pero se ha roto el hechizo neoliberal y ha comenzado en serio la presión para buscar alternativas económicas y sociales.

Mucho antes de la muerte de Thatcher, los adeptos más fieles ya estaban alarmados por el hundimiento de la reputación de su heroína. Cuando los verdaderos costes de sus políticas de libertad financiera sin cortapisas y de tierra quemada industrial se hicieron innegables, el alcalde conservador de Londres, Boris Johnson, se lamentó de que el nombre de la antigua primera ministra se hubiera convertido casi en un insulto, en un «epítome de egoísmo y del

yo primero». El que fuera su gurú de las relaciones públicas, Maurice Saatchi, temía que «se estén cuestionando sus principios del capitalismo». Los irredentos insistieron en que si los jóvenes se dieran cuenta de hasta qué punto Gran Bretaña había sido un caso perdido en la década de los setenta —el comentarista conservador extremo Simon Heffer declaró que el país había recordado al bloque soviético, a medida que hombres con «dentaduras estropeadas y trajes mal cortados» (refiriéndose a los dirigentes sindicales) tomaban el control de la vida pública— entenderían por qué millones de personas habían tenido que perder sus empleos, por qué las industrias y las comunidades tuvieron que ser destruidas, y por qué se entregaron miles de millones a los ricos. El argumento más difundido entre la clase dirigente fue que, aunque Thatcher había tomado medidas duras y había «ido demasiado lejos», su remedio había sido necesario para curar una economía enferma y restablecer su buena salud.

En realidad no hizo nada de esto. El crecimiento económico medio en la década «thatcherista» de los ochenta fue del 2,4 por ciento, exactamente el mismo que en la enferma década de los setenta. Y fue aún más bajo durante la era post-Thatcher de los noventa, con el 2,2 por ciento, mientras que en la década corporativista de los sesenta la media fue de más de un 3 por ciento. La deflación salvaje de su gobierno destruyó en dos años una quinta parte de la base industrial de Gran Bretaña, generó un desempleo masivo, arrasó la industria y vendió un milagro de la productividad inexistente: el crecimiento de la productividad también fue mayor en los sesenta y entró en fuerte retroceso en la etapa Cameron. Su desregulación de la City sentó las bases de la crisis financiera que nos sepultó un cuarto de siglo más tarde. (Incluso el liberal diario *Economist* admitió que sus reformas podrían haber «sembrado las semillas» del colapso).

Lo que sí logró hacer fue redistribuir la riqueza de los pobres a los ricos, aumentando los beneficios y la desigualdad, reduciendo la participación de los asalariados en la renta nacional por medio de la privatización, la desregulación y el ataque a los sindicatos.

Ello explica que los sectores británicos más acomodados lo vivieran como un «boom», puesto que se redujo a más de la mitad el tipo máximo del impuesto sobre la renta, mientras que los ingresos reales de los más pobres cayeron el 40 por ciento durante su primera década en el poder. Y ello explica también por qué el funeral regio, financiado por el Estado, de una política ampliamente odiada, que nunca llegó a obtener los votos de más de un tercio del electorado, provocó tanta repulsa en todo el país. Por lo que respecta a la mayoría de los británicos, los sondeos de opinión mostraron que había fracasado el intento de rehabilitarla.

En los años setenta, Gran Bretaña se enfrentaba a una crisis estructural, pero había varias vías para superarla. Es evidente que el éxito de los mineros en 1984-1985 no habría podido revertir por sí mismo la marea neoliberal. Se trató de un fenómeno global, que poco después engulliría al comunismo soviético y de la Europa del Este, y que incorporó a cientos de millones de trabajadores formados y con salarios bajos al mercado capitalista mundial. Pero, al menos, dicha victoria habría debilitado seriamente a Thatcher, habría contenido los peores excesos de su gobierno y habría puesto freno a la huida hacia adelante del Laborismo hacia la «tercera vía», lo que con el tiempo se convirtió en el Nuevo Laborismo y en su adopción del núcleo de las propuestas de Thatcher. Con toda probabilidad, también habría fomentado la inversión en tecnologías de carbón no contaminantes. En cambio, se abandonó la investigación de vanguardia, en la medida en que el resultado del conflicto contribuyó a definir un futuro para el país liderado por la City y por las grandes empresas.

En aquel momento, los principales medios de comunicación reflejaron poco de lo que estaba realmente en juego, por lo que la mayoría presentó la huelga como una insurrección antidemocrática que desafiaba la lógica económica, mientras que todo el poder coercitivo y los recursos del Estado se movilizaban para aplastar a los mineros en defensa de sus puestos de trabajo y de sus comunidades. El amargo resultado del conflicto dejó debilitados y divididos tanto al Sindicato Nacional de Mineros (NUM) como al mo-

vimiento sindical en general. Sin embargo, en las cuencas mineras, los mineros continuaron llevando a cabo en la retaguardia una obstinada lucha industrial durante la mayor parte de la siguiente década. Y la clase política —desde el gobierno, pasando por la mayor parte de los medios de comunicación, hasta los dirigentes laboristas y sindicales que soñaban con una nueva era de «colaboración social»— nunca olvidó la gravedad del desafío planteado por el NUM, tanto en los años setenta como en los ochenta, ni dejó pasar una oportunidad para denigrar la huelga de 1984-1985 y su liderazgo. Esta «sabiduría recibida» de mitos y verdades a medias sobre la huelga y su supuestamente inevitable derrota se filtró en el pensamiento de muchos sindicalistas en los años siguientes, y contribuyó a limitar su sentido de lo posible.

Pero a raíz de la crisis política que generó en 1992 el cierre de los pozos mineros por los conservadores, se produjo un cambio en las actitudes populares hacia el conflicto de mediados de los ochenta. El reconocimiento de que el gobierno de Thatcher se había propuesto realmente destruir la industria del carbón —tal y como había advertido el presidente del NUM, Arthur Scargill, frente a las acusaciones demagógicas de alarmismo— aportó una nueva dimensión a la decidida resistencia de los mineros. Películas como *Billy Elliot* y *Tocando el viento* abordaron la devastación de las zonas mineras provocadas por unos cierres decididos por motivos políticos. Una nueva generación de activistas anticorporaciones pudo identificarse con aquellos que se habían enfrentado en la década anterior a la invasión violenta de sus comunidades por parte de una policía militarizada. Al tiempo, aumentó la rabia del movimiento obrero ante la indulgencia de la policía y de las compañías petroleras frente a los bloqueos a causa de los impuestos sobre los carburantes que llevaron a cabo los agricultores y transportistas autónomos en el otoño de 2000 (incluyendo a los transportistas que años antes habían atravesado con violencia los piquetes del NUM), en comparación con el tratamiento que se había dado a los mineros. Unas semanas después, el vice primer ministro de Blair, John Prescott, recordó a los delegados en la conferencia del Partido Laboris-

ta que las comunidades de las cuencas mineras habían sido «destruidas por los prejuicios del régimen de Thatcher».

Esta posición refleja lo que entonces se convirtió en una tendencia dominante de la opinión pública, que había estado fuertemente dividida en el momento de la huelga. Pero con la aparición de una nueva generación de sindicalistas de izquierdas durante el segundo mandato de Tony Blair, la vieja demonología de 1984-1985 regresó a la política nacional. Cuando el conflicto de los bomberos con el gobierno del Nuevo Laborismo llegó a un punto álgido en 2002, el primer ministro llamó a sus líderes «scargillianos» e insistió, adoptando el mismo tono agresivo que Thatcher, en que no habría un retorno a «aquellos tiempos». En realidad, ni el conflicto ni los líderes de los bomberos guardaban parecido alguno con la huelga de los mineros o con el presidente del NUM. Pero al establecer esa asociación, Blair esperaba evocar el espectro de un retorno del sindicalismo militante e identificar las demandas de los bomberos como un retroceso ilegítimo.

En una era de sindicatos débiles, empleadores arrogantes e inseguridad laboral galopante, no había muchas probabilidades de que aquello fuera a ocurrir. Sin embargo, dos décadas después de la huelga de 1984-1985, la propaganda hostil y las invenciones que fueron tan familiares durante el año que duró el conflicto volvieron a inundar las noticias de la prensa y de la televisión. Una vez más, estábamos en un mundo en el que los piquetes de los mineros eran considerados como «tropas de asalto» y «escuadrones», y las tácticas de sus líderes, una «guerra relámpago» (todos estos términos se emplearon en un documental del Channel Four sobre la huelga, *Cuando Gran Bretaña fue a la guerra*, emitido en 2004); Arthur Scargill, y no Margaret Thatcher, era el culpable del cierre de la industria del carbón y de las penalidades de los mineros (quienes, de manera incomprensible, lo seguían eligiendo y reeligiendo). Además, la causa de los mineros era «inútil»; aunque seguramente habrían logrado sus objetivos si los líderes del NUM hubiesen convocado una consulta nacional o si los huelguistas no se hubiesen enfrentado en batallas campales a los esquiroles y a la policía. La

misma historia se repitió en su vigésimo quinto aniversario. Desde el estrecho aliado de Thatcher, Norman Tebbit, quien recordó la huelga como una «guerra contra la democracia», pasando por el antiguo líder laborista Neil Kinnock, que seguía denunciando la «locura» de los líderes de los mineros, hasta el periodista de la BBC Andrew Marr, quien atribuyó a la «incompetencia» de Scargill la muerte prematura de la industria del carbón, se extendió un consenso «a lo Alicia en el País de las Maravillas» entre los principales medios de comunicación. En contra de toda evidencia, todos estuvieron de acuerdo en que la huelga había sido la causa de la decadencia vertiginosa de la minería, y no el gobierno que la había ordenado.

Una prueba del persistente impacto del sacrificio de los mineros y del poder potencial del sindicalismo radical —incluso en un contexto industrial y económico muy diferente— es que, una generación después de los hechos, todavía parecía necesario representar la huelga como un funesto cuento moral, y a su liderazgo como el epítome de un autoengaño megalómano. En los años inmediatamente posteriores al conflicto, mientras que el carbón británico seguía generando el 80 por ciento de la electricidad del país, la determinación por hundir la reputación de los líderes mineros de forma definitiva fue, por supuesto, mucho más drástica. El contexto de la extraordinaria campaña de acusaciones de corrupción contra los dirigentes del NUM —basada en los acontecimientos de la huelga— fue lo que primero me llevó a escribir este libro.

El escándalo lanzado por el *Daily Mirror* y por el popular programa de televisión *Cook Report* en la primavera de 1990 generó una intensa cobertura nacional periodística, radiofónica y televisiva durante casi un año, dio lugar a una docena de acciones legales e investigaciones, y costó al NUM cientos de miles de libras. En parte como resultado de todo ello, los mineros y su sindicato fueron inmovilizados mientras el gobierno conservador se preparaba para el asalto final y la privatización de la industria del carbón. Durante un tiempo, se especuló que el presidente del NUM, el líder de la huelga más importante de la posguerra en

Gran Bretaña, sería forzado a dejar su puesto o incluso terminaría en la cárcel.

Cuando se publicó la primera serie de «revelaciones» en el *Daily Mirror*, el 5 de marzo de 1990, parecía increíble que los autores de lo que se anunció como una exhaustiva investigación, respaldada por un alto número de testigos aparentemente independientes, pudieran estar totalmente equivocados. Pero, a medida que yo informaba del conflicto en el periódico *The Guardian*, se hizo cada vez más evidente que la historia real no era en absoluto lo que otros y yo mismo habíamos imaginado en un principio; y mucho menos lo que se había impreso en el *Mirror* o emitido en la Central Television. Y cuando se fueron desenmarañando las acusaciones, y las causas judiciales y las investigaciones se fueron derrumbando, comenzaron a surgir atisbos de lo que en realidad había detrás de este asunto: maniobras turbias, agentes provocadores, operaciones de vigilancia, manipulación política y engaños diplomáticos, así como hasta dónde estuvieron dispuestos a llegar los servicios de seguridad en la guerra contra el NUM, tanto durante como después de la huelga 1984-1985. Esta es la historia que he tratado de contar en estas páginas.

Recientemente se ha sabido mucho más acerca de los métodos encubiertos usados contra el NUM y otros sindicatos; documentos gubernamentales previamente secretos, elaborados antes y después de la huelga, han arrojado una nueva luz sobre los planes del gobierno de Thatcher para destruir el sindicato de mineros, recurriendo al ejército si hubiese sido necesario. Los tribunales franceses declararon repetidamente que el principal delator de los líderes de los mineros en el escándalo de 1990 había mentado, y que él mismo había firmado los documentos que, según él, habían sido falsificados por Scargill (y dichas sentencias fueron ejecutadas en Inglaterra). El *Mirror* reconoció que sus acusaciones iniciales habían «manchado con calumnias» la reputación de Scargill. Y cincuenta diputados solicitaron una investigación pública sobre las operaciones de los servicios de seguridad contra el sindicato de mineros. Basándose en las alegaciones expuestas aquí y en el reportaje

de Channel Four, los parlamentarios declararon en aquel momento que Stella Rimington debería ser cesada como directora del MI5.

Sin embargo, ésta se retiró dos años más tarde y transitó cómodamente a su nuevo puesto de directora corporativa no-ejecutiva, beneficiándose del sistema que su organización había trabajado tantos años para proteger. Posteriormente, se dedicó a escribir novelas de espionaje, y, en 2001, también ella tuvo problemas con el Estado secreto a causa de la publicación de un libro comprometido de memorias. Su sucesor como jefe del MI5, Stephen Lander, insistió en que se suprimieran los pasajes sobre la huelga de los mineros de 1984-1985. Al menos, ella confirmó por primera vez públicamente —tal y como yo había afirmado antes en este libro— su papel y el del MI5 durante la huelga, con Scargill y otros líderes del NUM como objetivos, mientras intentaba descargar la responsabilidad de las operaciones más polémicas de la Sección Especial de la policía. Pero la experiencia de entrar en conflicto con la máquina de seguridad de Whitehall hizo que aflorara la naturaleza civil-libertaria de la antigua espía: atacó al Nuevo Laborismo por socavar los derechos civiles, advirtió que éste hacía el juego a los terroristas alimentando el temor a un «estado policial», criticó a los Estados Unidos por el uso de la tortura (al tiempo que insistía en que el MI5 «no utiliza esas prácticas») y pidió una mayor supervisión de los servicios de inteligencia.

Entre tanto, el informante del MI5, David Shayler, reveló que mientras trabajaba para el servicio de seguridad había visto parte del expediente personal de Scargill, en el que se dejaba claro que al menos un agente había trabajado entre los líderes mineros en la sede nacional del NUM durante la huelga de 1984-1985. Antiguos oficiales de policía de alta graduación también afirmaron que la Sección Especial¹ mantuvo a un agente de alto nivel en la oficina de Scargill, que contribuyó a «derrotar la huelga». Desde que la Guerra Fría ha pasado a la historia, los veteranos del Estado secreto han estado cada vez más dispuestos a revelar un poco más sobre su mundo sórdido y antidemocrático: la enorme lista negra de activistas, el uso de agentes e informantes situados en todos los niveles del

movimiento sindical, la desestabilización y el socavamiento de las huelgas, y la traición de sus participantes por parte de los líderes sindicales que trabajaban en secreto para los servicios de seguridad. En 2002, un oficial retirado de la Sección Especial reveló al programa *True Spies* de la BBC que, durante la década de los setenta, una de sus fuentes encubiertas dentro del sindicato de mineros había sido ni más ni menos que su entonces presidente: el farsante «moderado» Joe Gormley.

Ni los servicios de seguridad, ni tampoco sus patronos políticos, han sido llamados jamás a rendir cuentas de ninguno de estos abusos de poder. Pero dado que nunca se ha responsabilizado al MI5 por el hecho de que una facción de ese organismo conspiró para derrocar al gobierno laborista de Harold Wilson en la década de 1970, seguramente ello no puede sorprendernos. De hecho, el MI5 ha crecido sin control desde el fin de la Guerra Fría, a pesar del declive de sus antiguos enemigos de izquierda y de los sindicatos, y del impacto del proceso de paz en Irlanda del Norte. Los objetivos del servicio de seguridad han pasado de ser los espías soviéticos, el IRA y otros «subversivos» a los grupos radicales islámicos. Y, a raíz de los atentados de Nueva York y Washington en 2001, ha ocupado un papel central en el frente británico de la «guerra contra el terror» de los Estados Unidos. Lejos de vivir bajo la sombra de su turbio pasado, el MI5 ha duplicado su tamaño, y ha obtenido un nuevo barniz de credibilidad pública gracias a la idea de que sus agentes trabajan para prevenir atrocidades, en lugar de espiar a activistas políticos y de infiltrarse en los sindicatos. Algunas representaciones de ficción, como la serie televisiva *Spooks*, le han conferido un glamur más allá de la parodia, por lo que las afirmaciones públicas sobre sus actividades y supuestos triunfos, por lo general imposibles de verificar, se presentan habitualmente en los medios de comunicación como hechos comprobados.

Por supuesto, la vigilancia a escala global de los teléfonos móviles, de los correos electrónicos y del tráfico de Internet que llevan a cabo la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y

el GCHQ británico —que reveló en 2013 el informante sobre la NSA, Edward Snowden— se encuentra en una escala totalmente distinta de las operaciones, entonces sin precedentes, que se llevaron a cabo contra el sindicato de mineros británicos y su red de solidaridad internacional en 1984-1985. Ambos organismos se crearon para espiar al resto del mundo, pero han terminado por centrar su atención en sus propios ciudadanos sin restricción efectiva alguna, operando en conjunción con un grupo de grandes corporaciones locales de sobra conocidas. Y al proporcionar apoyo de inteligencia para los ataques con drones que han matado a miles de civiles en Pakistán, Afganistán, Yemen y Somalia, la NSA y el GCHQ, al igual que sus organizaciones espías hermanas, están extendiendo el terror que se supone están combatiendo. En realidad, todas estas agencias de espionaje estatal son instrumentos de poder tanto nacional como global, que operan más allá del mundo del terrorismo. La rendición de cuentas efectiva apenas ha avanzado en treinta años, a pesar de las apariencias de control que prestan el marco legal británico, los comités de control parlamentario y los certificados ministeriales.

Mirando hacia atrás, la campaña de difamación de 1990 alentada por los servicios de inteligencia contra Arthur Scargill y el NUM constituye casi un clásico en su género. Su modelo fue imitado casi al pie de la letra justo después de la guerra de Irak en el aluvión de acusaciones lanzadas contra George Galloway, el diputado laborista que lideraba entonces la posición contraria a la guerra. Por casualidad, yo me había encontrado con Galloway el primer día de la campaña mediática contra Scargill, en marzo de 1990, y vi que, a diferencia de otros políticos de izquierda de aquella época, desde el principio estaba convencido de que las acusaciones de corrupción contra los líderes de los mineros eran falsas. Trece años más tarde, pocos días después de la entrada en Bagdad de las fuerzas estadounidenses, el propio Galloway fue acusado de haber recibido, en pagos secretos, 375.000 libras al año de Saddam Hussein. Dicha acusación se basaba en unos supuestos documentos encontrados por un periodista del *Daily Telegraph* entre los restos hu-